



Mauritania en construcció: ¿una oportunitat de mínimos o de máximos?

Febrero 2007
NÚRIA TOMÀS



Índice

<i>Introducción</i>	3
1. <i>El 3 de agosto de 2005: el inicio de la construcción</i>	4
2. <i>Mauritania: ¿territorio de confluencia o de tensiones?</i>	5
3. <i>El ‘passif humanitaire’ y otras reivindicaciones: ¿desatendidas temporalmente o aparcadas definitivamente?</i>	7
4. <i>Valoraciones de un año de transición</i>	9
5. <i>Riesgos y retos en el futuro de Mauritania</i>	11
<i>Conclusión</i>	14
<i>Bibliografía</i>	15



Introducción¹

Mauritania celebró en noviembre de 2006 sus primeras elecciones en el marco de la transición democrática impulsada tras el golpe de Estado de agosto de 2005². Si bien esta celebración electoral, y sobre todo su desarrollo globalmente satisfactorio, puede ser considerada como una primera consolidación del proceso de transición, quedan aún pasos por recorrer. En primer lugar, porque todavía faltan las elecciones presidenciales de marzo que marcarán de forma definitiva el futuro del país. En segundo lugar, porque numerosos factores han hecho que el alcance de la transición sea por el momento limitado. En consecuencia, para muchos la oportunidad para una verdadera transición se plantea a partir de abril de 2007.

Dicho esto, no hay que desestimar la trascendencia del actual periodo de transición, ya que es aquí donde se han puesto buena parte de los cimientos que guiarán y, en cierto modo, condicionarán las futuras actuaciones. Estos cimientos han sido, por una parte, la definición de tres campos de actuación del gobierno de transición (a saber, el ámbito político –en el marco del cual se enmarcan las elecciones, la reforma de la justicia y la mejora de la gobernabilidad); por otra parte, la promulgación de una reforma constitucional, aprobada en referéndum por la mayoría de la población y que insta a algunos principios democráticos; y finalmente, el impulso de nuevas prácticas políticas de transparencia y de apertura.

Sin embargo, a pesar de la adopción de ciertas dinámicas democratizadoras durante estos 16 meses de transición, varios factores inciden desfavorablemente en una evolución positiva del proceso de cambio. En primer término, las inercias heredadas tras más de 20 años de prácticas autoritarias, represivas y clientelares; en segundo lugar, el hecho de que los impulsores del cambio provengan del antiguo régimen, así como buena parte de los actores de la vida política y administrativa del país; finalmente, y sobre todo, la existencia de conflictos no resueltos que tienen una fuerte incidencia en la memoria colectiva y que, además, tienen su prolongación en dinámicas y realidades actuales.

Así, dada la paradoja que supone el hecho de que una transición a la democracia fuera iniciada tras un golpe de Estado, impulsada por una Junta Militar³, y liderada por los máximos colaboradores durante más de 20 años del dictador Ould Taya⁴, se abren algunos interrogantes: ¿Qué factores desencadenaron el golpe? ¿Qué intereses tenían los protagonistas en que se produjera un cambio político de estas características? Incluso, ¿era posible una transición que no viniera de dentro del propio sistema? Sobre todo, ¿hasta qué punto se ha producido un verdadero cambio y hasta qué punto es éste posible dadas las circunstancias? En definitiva, ¿se trata de una transición de mínimos o de máximos? En todo caso, las oportunidades para que sea de máximos existen, pero las amenazas para que sea de mínimos, o para que no sea, también.

Este informe se divide en cinco partes. En primer lugar, se abordan los antecedentes inmediatos al golpe de Estado de 2005 y sus repercusiones; en segundo lugar, se analizan los elementos de tensión en la sociedad mauritana; seguidamente, se trata la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en el pasado y presente del país; en cuarto lugar, se presenta una valoración del primer año de transición, desde finales de 2005 hasta finales de 2006; finalmente, se plantean los riesgos y los retos que Mauritania debe afrontar.

¹ Este informe es el resultado de un viaje a Mauritania entre el 19 de noviembre y el 1 de diciembre de 2006 en el que se llevaron a cabo diversas entrevistas con actores sociales y políticos del país y de la comunidad internacional vinculados a la transición política. Por petición expresa de las personas entrevistadas no se han hecho citas. La responsabilidad del contenido de este informe corresponde exclusivamente a la autora.

² El 24 de junio de 2006 se realizó un referéndum para aprobar los cambios constitucionales, el 19 de noviembre y el 1 de diciembre tuvieron lugar la primera y segunda vuelta, respectivamente, de las elecciones legislativas y municipales; el 21 de enero de 2007, las elecciones senatoriales; y en marzo las presidenciales.

³ *Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie* (CMJD), formado por 17 miembros.

⁴ El coronel Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya, conocido también como 'Maguya', llegó al poder en diciembre de 1984 tras un golpe de Estado que derrocó a Mohamed Khouna Ould Haidalla.



1. El 3 de agosto de 2005: el inicio de la construcción

El 3 de agosto de 2005 se producía un nuevo golpe de Estado en la historia de Mauritania. A pesar de poder parecer un golpe más, numerosas circunstancias permitieron identificar rápidamente su nuevo calado. Cuando el Presidente Ould Taya se encontraba en los funerales del rey de Arabia Saudita, el hasta entonces Director General de la Seguridad Nacional, Ely Ould Mohamed Vall, y un comandante del Batallón de la Seguridad Presidencial, Mohamed Ould Abdel Aziz, tomaron el poder. En el primer comunicado emitido, el Consejo Militar justificó su acción por la deriva del antiguo régimen, que calificaron de suicida. Su voluntad era *'cambiar el rumbo del país y construir un proyecto alternativo de sociedad orientado hacia la institución de una democracia verdadera y de las bases de un desarrollo duradero'*⁵.

Desde su toma del poder en 1984, el coronel Ould Taya había gobernado el país usando verdadera mano de hierro. En el plano interno, a los cuatro años del inicio de su presidencia tuvieron lugar los *'événements'*, acontecimientos en los que, en el marco de un conflicto con Senegal y como represalia a un supuesto intento de golpe de Estado en 1987, el régimen perpetró numerosas violaciones y asesinatos principalmente dirigidos a la comunidad negro-africana de Mauritania. En 1990 y 1991, una purga de las mismas características afectó el interior de las fuerzas armadas. La gravedad de los acontecimientos, conocidos posteriormente como *passif humanitaire* le valió a Ould Taya el calificativo de genocida y a Mauritania la denominación de *'segundo país del apartheid'*⁶. En el plano internacional, su política errática le llevó a apoyar a S. Hussein en la primera Guerra del Golfo, y posteriormente a ser el primer Estado de la zona en establecer lazos con Israel.

Tras cerca de dos décadas en el poder, el régimen de Ould Taya había llegado a una situación insostenible: primero fue la profunda crisis económica en la que vivía el país, seguida del acercamiento a Israel muy mal percibido por la población mauritana; después fue la adscripción a la política antiterrorista de EEUU, que contribuyó a la persecución de cualquier elemento calificado de islamista, y que al fin y al cabo sirvió de excusa para encarcelar u obligar al exilio a buena parte de la oposición política. Pero fue sobre todo a partir de 2003 cuando la tensión se incrementó sustancialmente: el intento de golpe de Estado en junio, perpetrado por un grupúsculo de capitanes que pretendían emular la Revolución de los Claveles en Portugal (que posteriormente formaron el grupo armado *Les Cavaliers du Changement*), y que ocasionó numerosos muertos y heridos, fue el punto de inflexión. No fue tampoco casualidad el hecho de que el descubrimiento de petróleo y el anuncio de su extracción estimularan el descontento en estas mismas fechas. La impunidad ante la corrupción y el desvío generalizado de fondos públicos había llegado a límites difícilmente sostenibles. Asimismo, las luchas de poder internas, juntamente con la marginalización de ciertas tribus⁷, se habían incrementado en los últimos tiempos. Paralelamente, la sensación generalizada de *'fin de reino'*, corroborada por los delirios megalómanos de Ould Taya, se hacía evidente. En definitiva, a mediados de 2005 la situación era tan explosiva que muchos no dudan en calificarla de al borde de la guerra civil⁸.

En estas circunstancias, no es sorprendente que el golpe de Estado del 3 de agosto 2005 fuera celebrado prácticamente de forma unánime. Tras las primeras horas de incertidumbre por tratarse de una toma de poder no constitucional, se fue extendiendo la aceptación hacia las nuevas autoridades. Este sentimiento contradictorio, de condena en su forma pero no en el fondo, se reflejó en numerosas declaraciones: desde la comunidad internacional, que tras la vacilación inicial, se afaná en expresar su confianza ante las

⁵ Recogido en la introducción del *'Rapport sur l'activité du gouvernement de transition'*, Gobierno de Transición, noviembre 2006.

⁶ En 2002, 23 ciudadanos mauritanos hicieron valer la ley de competencia universal belga para acusar al Presidente Ould Taya de genocida y de autor de crímenes contra la humanidad cometidos entre 1989 y 1992. Por otra parte, la fórmula *'segundo país del apartheid'* fue utilizada inicialmente por el FLAM, movimiento de oposición, y fue retomada posteriormente por otros países africanos vecinos (ICG, 2006).

⁷ Esta marginalización explicó también el intento de golpe de Estado de junio de 2003 (tras el cual, Ould Taya hizo una purga entre responsables de las regiones del Este –Hodhs y Assaba). En Mauritania, la prevalencia de la tribu sigue siendo muy fuerte a pesar de la existencia formal de estructuras de Estado. Es más, y aunque pueda parecer paradójico, la democratización impulsada a principios de los años noventa no hizo más que reforzar las adscripciones tribales, ya que los partidos políticos se convirtieron en correas de transmisión de los intereses locales (el llamado fenómeno de *'retribalización'*, descrito por López Bargados, A., 2006).

⁸ Otro hecho incrementó la tensión, cuando en junio de 2005 una guarnición de la base de Lemgheity, en el norte del país, fue atacada por elementos del GSPC argelino y hubo 20 muertos. El ataque tuvo, de hecho, muchos elementos oscuros. Incluso un grupo de opositores en el exilio acusó al poder mauritano de haber encargado la operación al GSPC, que habría servido para justificar la política contra el terrorismo y contra el islamismo del régimen (ICG, 2006). Además, hubo dos supuestos intentos más de golpe de Estado en 2004 y 2005.



perspectivas de cambio que se presentaban, hasta las asociaciones de derechos humanos, que en un comunicado conjunto expresaron que a pesar de condenar la toma de poder a través de un *putsch* reconocían que, dadas las circunstancias, sólo los militares podían cambiar las cosas.

La particularidad de este golpe de Estado, cuyos propios autores insistieron en llamar '*changement*' (cambio), se evidenció desde las primeras semanas. Al poco tiempo nombraron un gobierno de transición civil. Seguidamente, convocaron para octubre de aquel año unas jornadas de concertación en las que participaron centenares de actores de la vida política, social y económica del país para definir las próximas líneas de actuación⁹. A partir de aquí se estableció un ambicioso programa con tres ámbitos de acción y se crearon comités interministeriales encargados de su ejecución y supervisión. Los tres ámbitos eran el político (que incluía la reforma de la Constitución y el compromiso de elecciones), la reforma de la justicia, y la mejora de la gobernabilidad. En paralelo, el Gobierno estableció con la Unión Europea los llamados '24 compromisos' que fueron esencialmente el espejo de las jornadas de concertación, entre los que se incluía reducir el periodo de transición a 18 meses (inicialmente eran 24), la exclusión de la competición electoral de los miembros de la Junta Militar y del Gobierno y su promesa de neutralidad¹⁰. Entre las medidas de apertura, se legalizaron numerosas asociaciones de derechos humanos (aunque este reconocimiento ya se había iniciado unos meses antes del golpe debido a las fuertes presiones internacionales)¹¹; y también se decretó una amnistía general dirigida a prisioneros políticos y de opinión¹². Los cambios constitucionales, promovidos por las autoridades y votados en el referéndum de junio 2006, en los que, entre otros aspectos, se limitaba el mandato presidencial, fueron signos palpables de voluntad de cambio. Sin embargo, varias cuestiones no han quedado por el momento resueltas en esta transición, hecho que condiciona y limita sus futuros logros.

2. Mauritania: ¿territorio de confluencia o de tensiones?

Mauritania es el país africano por excelencia, comparable probablemente sólo con Sudán, donde confluyen poblaciones árabes y negro-africanas¹³. La cuestión identitaria ha sido y es un elemento de tensión (pero no por ser Mauritania un espacio compartido, ya que eso indicaría la imposibilidad de que diferentes comunidades nacionales pudieran convivir sin fricciones, como si la mayoría de Estados no fueran multinacionales; y además obviaría el hecho de que los contactos entre poblaciones a un lado y otro del río Senegal han sido históricamente amistosos y fructíferos), sino por otros motivos. Esencialmente, el hecho de que, en Mauritania, la arabidad ha sido promovida por el Estado como un signo de identidad. Las políticas de arabización, ya iniciadas en el siglo XIX y reafirmadas en varias ocasiones a partir de la independencia, sobre todo con las políticas propugnadas por M. Ould Daddah en los años 60, han sido el instrumento de esta visión. '*Mauritanie, le pays des maures*' es una expresión hoy en día repetida.

Esta perspectiva es lamentada por la parte de la población no árabe, que siente un perjuicio a un doble nivel: en primer lugar, por las discriminaciones a las que son sometidos en aspectos como el cultural, lingüístico, económico, político o social; en segundo lugar, por los agravios sufridos en el pasado (no tan lejano) y que siguen sin ser reparados. Para quienes son conscientes de esta situación, no únicamente dentro de entornos negro-africanos, sino también desde plataformas e individuos pertenecientes a la comunidad árabe, la transición apareció como una oportunidad para afrontar esta cuestión que no debería

⁹ Tuvieron lugar en Nouakchott entre el 25 y el 29 de octubre de 2005 con la participación de unas 600 personas.

¹⁰ En la ordenanza constitucional 2005/005 del 29/09/05 se proclama la ineligibilidad del Presidente y de los miembros del CMJD, del Primer Ministro y de los miembros del Gobierno en las elecciones previstas en el marco de la transición.

¹¹ Hasta aquel momento sólo se reconocía a la *Ligue des Droits de l'Homme*. A partir de abril de 2005 se legaliza SOS Esclave, el Comité de Solidarité avec les Victimes des Droits de l'Homme en Mauritanie, y la Association Mauritanienne des Droits de l'Homme. Después del golpe de Estado de agosto de 2005 se reconoce el Forum des Organisations Nationales des Droits de l'Homme (FONADH), que incluye 17 asociaciones.

¹² Desde septiembre de 2005, unos 215 mauritanos se benefician de las leyes de amnistía, incluidos 65 islamistas moderados y opositores políticos entre los que se encontraban miembros de *Cavaliers du Changement* y mauritanos en el exilio como el líder de *Conscience et Résistance*, entre otros.

¹³ Entre las comunidades negro-africanas se encuentran los halpulaar, los soninké y los wolof. Se llama halpulaar a los hablantes de la lengua pulaar, que incluye los Toutcouleur y los Fulani (peuls). No existen datos específicos sobre la proporción de los distintos grupos, pero se estima que los más numerosos son los Halpulaar, seguidos de los soninké y los wolof. Para más información, ver <http://www.cidcm.umd.edu/inscr/mar/data/rimkewri.htm>



ser desaprovechada. No obstante, los pocos avances hasta el momento en este sentido han generado un considerable desencanto.

Un aspecto controvertido, que indica hasta qué punto esta cuestión es un tema sensible, se refleja en los datos de población. No existen cifras oficiales sobre la proporción de la población perteneciente a una u otra comunidad¹⁴. Se maneja habitualmente la cifra del 80% de la población arabobereber (*bidan*) y el 20% negro-africana (*kewir*). Sin embargo, otras indicaciones mostrarían otra proporción¹⁵. Llegados a este punto cabe explicar una particularidad de la sociedad mauritana: estructuradas estas comunidades en estratos jerarquizados, en la base de la población arabobereber se encuentran los *harratin* o antiguos esclavos liberados. Éstos, aún siendo de raza negra, crecieron bajo la influencia cultural arabobereber. Así, datos alternativos hablan de una composición aproximada *harratin* en un 40%, noble *bidan* en un 30%, y negro-africana en otro 30%. Estas cifras no sólo mostrarían que la población *harratin* tiene un enorme peso, sino que la población noble *bidan* es menor que el dato oficialmente manejado. Es verdad que los *harratin* se han identificado más con sus antiguos amos que con sus correligionarios de piel, haciendo un papel a menudo ambiguo, pero en todo caso estos datos ponen de relieve un discurso oficial distorsionado respecto a la realidad y que parece legitimar prácticas discriminatorias hacia la comunidad negro-africana, como en su acceso al poder político y económico, o en su ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales.

La ‘fractura’ entre arabobereberes y comunidades negro-africanas tiene otro componente que ha supuesto un elemento más de fricción debido a su politización: la división lingüística. Esta tensión, presente desde hace décadas, ha ocurrido a un doble nivel: primero, con la marginación de las lenguas africanas, que no están oficialmente reconocidas en la Constitución, y después, con la relegación a un segundo plano del francés, lengua más propia de las comunidades negro-africanas debido, entre otros factores, a su mayor permeabilización a la colonización. Efectivamente, las diversas políticas de arabización han buscado la imposición de la lengua árabe por encima de las otras¹⁶.

Esta política de privilegio de la lengua árabe se materializó con la instauración de dos líneas en las escuelas: una obligatoria en árabe para los arabobereberes y otra optativa entre francés y árabe para los negro-africanos. Ello ha tenido dos consecuencias: la primera, una clara disfunción, ya que parte de la población no conoce (o no suficientemente) el francés, siendo ésta la lengua administrativa del país. Así, se ha llegado a la paradoja de que el gobierno paga cursos del idioma de la antigua colonia a jóvenes diplomados, no sólo por la necesidad de aprender la lengua administrativa *de facto*, sino también por ser el francés el vehículo de relación con la ex colonia y de buena parte de las relaciones de Mauritania con el exterior. La segunda consecuencia de esta política es que, en muchos casos, ha provocado una separación física entre mauritanos en función de su origen comunitario en las escuelas, en un espacio como la educación que precisamente tiene el potencial de servir de punto de unión. Estos elementos han generado reticencias mutuas a utilizar la otra lengua: el árabe porque ha sido percibida como una lengua impuesta, y el francés por ser percibida como lengua extranjera en un país ‘árabe’. Las consecuencias han sido, para la población negro-africana, la discriminación por no conocer el árabe en el acceso a la función pública, hecho que ha provocado a su vez otra paradoja: la existencia de una élite negro-africana francófona (a menudo formada en el extranjero) que no ha tenido acceso a puestos de responsabilidad. La reforma de la educación de 1999 es muy reciente e introdujo pocos avances en este sentido.

Así, por lo general, la creciente polarización entre comunidades es un elemento muy palpable hoy en día en Mauritania y que, por tanto, resulta preocupante¹⁷. En este sentido, este elemento es un foco de un

¹⁴ Sólo existe el censo del 2000 que extrapola los datos de forma poco correcta y el censo electoral que no es útil porque no incluye los menores.

¹⁵ Por ejemplo, estimaciones hechas a partir de estadísticas realizadas en la capital, donde se concentra, de hecho, buena parte de la población mauritana.

¹⁶ Un reflejo de esta situación es que la Constitución mauritana sólo reconoce el árabe como lengua oficial (artículo 6 de la Constitución de 1991). A su vez, las lenguas árabes, poular, soninké y wolof son calificadas de lenguas nacionales. En Mauritania se habla una variante del árabe, el hassaniyya, dialecto árabe dominante desde el sur de Marruecos hasta la zona del río Senegal. El francés es simplemente tolerado.

¹⁷ A pesar de esta situación descrita, hay que añadir que hay multiplicidad de casos y que la separación entre personas pertenecientes a las diferentes comunidades no es totalmente generalizable. Por una parte, existen espacios de interpenetración y de permeabilidad en varios ámbitos, empezando por el político (en los partidos) y el social (con casos de matrimonios mixtos), generando por tanto puntos de contacto entre arabofonos y francófonos. Por otra parte, también existe permeabilidad entre las diferentes comunidades, representados por ejemplo por una élite arabobereber educada en francés, o jóvenes negro-africanos que escogieron



conflicto potencial de considerable riesgo. De hecho, en el pasado, los posicionamientos fueron extremos: por un lado, el movimiento armado FLAM¹⁸, defendiendo los intereses negro-africanos, y por el otro, grupos nasseristas que hablaban del ‘peligro negro-africano’. De hecho, tal y como se palpó durante esta transición, sigue siendo una cuestión candente. Por ejemplo, con motivo del referéndum, partidos como SAWAB pedían un mayor reconocimiento de la lengua árabe y la no permisión del francés como lengua administrativa, o por el contrario, otros como la *Alliance pour la Justice et la Démocratie* (AJD) o el *Parti Pour la Liberté l’Egalité et la Justice* (PLEJ) propugnaban el ‘no’ a la reforma de la Constitución por la falta de atención a reivindicaciones que afectaban a las comunidades negro-africanas. De hecho, la creación a finales de diciembre de 2006 de una agrupación política, el *Mouvement pour la Reconciliation Nationale* (MNR), integrado por la AJD, responde a esta percepción¹⁹. De hecho, la actual discriminación y los agravios sufridos por la comunidad negro-africana en Mauritania representan el traslado al presente de unos hechos que marcaron el pasado del país y que seguirán marcando su futuro: el *passif humanitaire*.

3. El *passif humanitaire* y otras reivindicaciones: ¿desatendidas temporalmente o aparcadas definitivamente?

El *passif humanitaire*, nombre por el que se conoce al conjunto de violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1989 y 1991 en Mauritania, se ha convertido por muchos motivos en una cuestión crucial hoy en día en el país. La referencia entre la población a aquellos hechos como ‘los acontecimientos’ (*les événements*) refleja su trascendencia y su presencia en la memoria colectiva, sobre todo, pero no sólo, de la parte de la población mauritana afectada.

El *passif humanitaire* se refiere a dos etapas: una primera, en 1989, cuando unos meses después de un conflicto con Senegal, el gobierno de entonces bajo el mando de Ould Taya ordenó la muerte de población civil negro-africana, no sólo en la zona del valle del Senegal, sino en poblaciones como Nouadhibou o Nouakchott. Aunque no existen cifras precisas al respecto, se calcula que murieron cientos de personas²⁰. Para muchos, se trató de una depuración étnica, planificada y ejecutada por el Gobierno, que perseguía explícitamente a la comunidad negro-africana y específicamente a la población civil²¹.

En una segunda etapa, entre 1990 y 1991, un supuesto intento de golpe de Estado justificó el arresto y tortura de miles de policías, militares, soldados y funcionarios negro-africanos. Muchos de ellos fueron asesinados (se habla de unos 2.000, pero sólo se han podido documentar 503 casos). A su vez, numerosas personas fueron obligadas a dejar el país (hubo unos 65.000 deportados a Senegal y 18.000 a Malí) y en muchos de estos casos, les fueron confiscadas sus tierras y sus documentos de identidad. Las consecuencias de los hechos de 1989, 1990 y 1991 son numerosas y presentes hoy en día: numerosos familiares de las víctimas sin ninguna indemnización; personas que sobrevivieron a las torturas; otros que perdieron su trabajo y que no lo han recuperado (algunos sí pero sólo a título individual); personas que volvieron tras la deportación pero sin poder acceder a su tierra ni recuperar sus papeles; y sobre todo la presencia hasta el momento de miles de refugiados en Senegal y Malí. Se calcula que actualmente quedan entre 10 y 15.000 de ellos fuera del país²².

La virtud de la transición ha sido poner sobre la mesa un tema hasta ahora tabú como el de las violaciones de los derechos humanos del régimen anterior, por lo menos a nivel de expresión y de debate, esencialmente gracias a las jornadas de concertación de octubre 2005. Sin embargo, esta apertura no ha

estudiar en la línea árabe, los llamados *arabisans* (en un momento en que parecía que podía proporcionar más ventajas, cuando ahora es más bien lo contrario, cosa que no significa que muchos negro-africanos no comprendan o no hablen el árabe). La rigidez de estas divisiones también se rompe a veces por la existencia de alianzas circunstanciales (tradicionalmente, los soninké han estado unidos a la élite árabobereber) o bien por otras fracturas intracomunitarias árabes o *kewri*.

¹⁸ El FLAM (*Forces de libération africaine de Mauritanie*), creado en 1983, elaboró el Manifiesto de los Negro-Africanos oprimidos (*Le Manifeste du Nègro-Mauritanien opprimé*) donde se censuraba al Gobierno por la marginación a que sometía a los mauritanos negro-africanos. Parte de los arrestados en 1989 fueron acusados de pertenecer al FLAM, aunque en varios casos su pertenencia no pudo ser probada por las autoridades.

¹⁹ Ver la Declaración del MNR del 31/12/06 en <http://www.cridem.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6533>

²⁰ Para más información, ver el documento de Amnistía Internacional *Human Rights Violations in the Senegal River Valley*, octubre 1990.

²¹ Según asociaciones de derechos humanos mauritanas, el hecho de que estas violaciones se produjeran por razón de pertenencia étnica permite calificarlas de actos de genocidio.

²² Entre 1995 y 1998 volvieron oficialmente 32.000, después de que en 1995 ACNUR terminara la asistencia.



tenido su traslación en los hechos ni en compromisos efectivos. Por ejemplo, las autoridades transicionales se comprometieron a crear una Comisión de Derechos Humanos, pero a finales de año 2006 ésta aún no había sido nombrada.

Por otra parte, la valoración del *passif humanitaire* no es para nada un tema neutro en la sociedad mauritana. La política oficial durante los 20 años de Ould Taya fue la negación, a pesar de la existencia de numerosas denuncias sobre todo a nivel internacional. De hecho, en 1993 se hizo una ley de amnistía, pero nótese la incoherencia de una ley que se refería a unos hechos teóricamente inexistentes. Si bien hoy la negación absoluta de las violaciones de los derechos humanos de aquellos años es difícil escucharla de forma pública, sí que la minimización de lo ocurrido, o bien la relativización de su importancia, es un discurso ampliamente difundido. Expresiones como ‘Mauritania tiene otros muchos problemas’, ‘fue sólo un conflicto con Senegal’, ‘hubo muchos más mauritanos expulsados de Senegal que de Mauritania y tampoco hoy se habla de ellos’, o ‘esta cuestión se ha magnificado’, están en boca de muchos actores de la vida política y social del país. Por el contrario, elementos de la sociedad civil, entre los que se encuentran muchas asociaciones de víctimas, han hecho de la denuncia de los hechos su caballo de batalla. De hecho, se puede apreciar una curiosa evolución de las reivindicaciones de los derechos humanos en Mauritania: durante el régimen de Taya, los partidos de la oposición asumían la reivindicación; sin embargo y paradójicamente, la apertura de la transición echó atrás a muchos de ellos, diluyendo su compromiso a medida que se aproximaba la cita electoral de noviembre de 2006, y prevaleciendo la búsqueda de la rentabilidad electoral²³ (en definitiva, no hay que olvidar que tanto en las estructuras políticas como administrativas sigue habiendo mucha gente implicada, sin olvidar que el propio Ely Ould Mohamed Vall era director de la Seguridad Nacional, el verdadero Ministro del Interior a la sombra en la época).

¿Por qué era importante abordar esta cuestión durante la transición? En primer lugar, para satisfacer las expectativas generadas en el marco del consenso conseguido durante las jornadas de concertación, que ya apuntaba a la necesidad de reconocer y abordar el *passif humanitaire*. En segundo lugar, y vista la prevalencia de la lógica electoral en la agenda de los partidos, porque las posibilidades de que el siguiente presidente se sienta interpelado por esta cuestión tan delicada son mínimas. Si a esto le añadimos la ordenanza que creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, sorprendentemente, excluye las violaciones de los derechos humanos ocurridas con anterioridad a junio de 2006²⁴, el escenario no es alentador.

¿Y por qué es importante abordarlo, tarde o temprano? En primer lugar, para dignificar a las víctimas, en sentido amplio, y para aminorar su sufrimiento. En segundo lugar, porque la impunidad no hace más que alentar la repetición de los hechos. El riesgo de que unos acontecimientos tan execrables como los que ocurrieron en Mauritania entre 1989 y 1991 puedan repetirse deriva de una tensión latente entre comunidades, de una discriminación existente en múltiples niveles, pero sobre todo de este pasado (no demasiado lejano, sólo 16 años) de sufrimiento ocultado y negado. Varios actores coinciden en afirmar que el riesgo de explosión social es considerable si la cuestión del *passif humanitaire* no es gestionada correctamente en un corto o medio plazo, para lo cual es necesario también la actuación en otros ámbitos, básicamente el socioeconómico y el político. Sin una apertura del ejercicio del poder a sectores más amplios del país, difícilmente se desactivarán todos los conflictos que Mauritania tiene pendiente.

Para aquellos que consideran que el *passif humanitaire* tiene que ser abordado para construir un futuro sólido y sin riesgo de explosión, la panoplia de medidas propuestas es muy variada: desde el reconocimiento (considerada la medida mínima), hasta el reconocimiento con indemnizaciones, más el retorno a los puestos de trabajo de los expulsados, más el retorno de la tierra, y finalmente, la petición de responsabilidades penales. La cuestión de los deportados aparece como más complicada, ya que implicaría resolver cuestiones delicadas como la devolución de tierras y sobre todo el ejercicio del derecho a voto, pero perfectamente abordable bajo un consenso suficiente. En todo caso, es unánime la apreciación de que el sentimiento de venganza no está presente entre las víctimas, pero sí que impera la necesidad de reconocimiento. También hay consenso en afirmar que un juicio no podría ser de máximos, sino que se podría juzgar a Ould Taya y a algunos de los máximos implicados.

²³ Algunos partidos como la AJD et PLJD sí que han mantenido sus posicionamientos, pero su incidencia es relativamente pequeña.

²⁴ El Artículo 5 de la ley que crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos estipula que las violaciones que tratará dicha Comisión son aquellas cometidas después de la entrada en vigor de la ley, firmada en junio de 2006.



En medio de esta tensión latente hay que añadir el tan escuchado discurso de la 'reconciliación nacional'. Este discurso es a menudo vacío de contenido y sólo hace alusiones vagas, sin concretar ni favorecer medidas en pro del reconocimiento del *passif humanitaire*. Además, la reconciliación nacional debería entenderse en un sentido amplio, es decir, que tuviera en cuenta aspectos como las desigualdades económicas, las discriminaciones legales y los desequilibrios. El debate sobre si ahora o nunca sigue abierto, pero en todo caso es necesario buscar fórmulas de desactivación real, tarde o temprano, y que no sean sólo discursos.

4. Valoraciones de un año de transición.

En general, la valoración del periodo de transición hasta pasadas las elecciones legislativas y municipales en diciembre de 2006 fue positiva, a pesar de haber habido algunos momentos puntuales de agitación y preocupación general.

Los principales logros percibidos se refirieron a la sensación de libertad y, sobre todo, al desbloqueo de numerosos temas hasta entonces tabú. Hay coincidencia en afirmar que las jornadas de concertación contribuyeron sustancialmente a ello y que significaron un verdadero punto de inflexión que rompió con las dinámicas de no diálogo del régimen pasado. Al mismo tiempo, fue bien valorado el aumento de la transparencia y la creación de instrumentos de control, como la obligación de publicar los resultados económicos o la instauración de una Inspección General del Estado; también la reforma del poder judicial, aunque hay conciencia de que sus resultados serán muy lentos; o el aumento de la libertad de prensa²⁵. Por otra parte, desde inicios del periodo de transición hubo dos aumentos de salario para los funcionarios, además de para los ministros, como medida anticorrupción. Así, según el informe gubernamental de finales de noviembre de 2006, tanto la corrupción como el desvío de dinero habían disminuido, permitiendo sacar a flote 3 millones de euros²⁶. Respecto a las reformas introducidas en la Constitución, la limitación del número y extensión del mandato presidencial fueron aspectos positivos. Respeto a la celebración de las elecciones de noviembre, la creación de una Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), la elaboración de un nuevo censo²⁷, la aceptación de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE), la adopción de la papeleta única como medida contra el fraude²⁸, el establecimiento de una cuota del 20% de mujeres en las listas electorales²⁹, o la alta participación (una media superior al 70%) muy superior a la esperada, entre otros aspectos, supusieron un verdadero paso adelante ampliamente celebrado. Así, la declaración preliminar de la MOE constató que las elecciones legislativas y municipales se habían desarrollado en un clima de 'calma' y 'libertad', aunque reconoció la existencia de procedimientos 'imperfectos' que debían ser mejorados³⁰.

Por otra parte, los reproches formulados a lo largo de la transición empezaron por la elección del gobierno, ya que la pertenencia de buena parte de sus miembros a las estructuras del antiguo régimen fue muy polémica, y duramente recriminada³¹. Otro elemento criticado fue la amnistía concedida a aquellas personas condenadas por corrupción, y de hecho, se sigue denunciando que, a pesar de los cambios, la

²⁵ La HAPA (*Haute autorité de la presse et de l'audiovisuel*) fue creada el 30 de octubre de 2005 tras las jornadas de concertación. A finales de 2006 se constataba la existencia de unos 30 periódicos.

²⁶ En el *Rapport sur l'activité du gouvernement de transition*, Gobierno de Transición, noviembre 2006.

²⁷ El censo (RAVEL- Recensement administratif à vocation électorale) se realizó en dos fases. En la primera, organizada entre el 15 de febrero y el 30 de abril de 2006, se inscribieron 989.798 electores sobre una población total de 2,8 millones de habitantes. El RAVEL complementario realizado poco antes de la jornada electoral de noviembre permitió censar a 80.000 electores suplementarios. La elaboración de un nuevo censo era una cuestión clave porque en el pasado había permitido muchas manipulaciones. Sin embargo, hubo dos colectivos que no pudieron votar: por una lado, parte de los retornados de Senegal, por otro, los mauritanos en el exterior.

²⁸ La adopción de la papeleta única limita considerablemente la posibilidad de prácticas de inducción y compra de voto, generalizadas hasta el momento en Mauritania, ya que dificulta el conocimiento por parte de otros de la opción votada (aunque no totalmente, ya que, por ejemplo, fotografías realizadas con teléfono móvil permiten identificar el voto —en las elecciones legislativas y municipales se detectaron algunos de estos casos).

²⁹ El establecimiento de una cuota del 20% de mujeres en todas las listas fue, sin embargo, un tema debatido durante la campaña y controvertido. Algunos lo consideraron una imposición artificial y otros un elemento sólo de escaparate. Finalmente, en la Asamblea Nacional hubo una representación de mujeres de un 18% y del 37% en los consejos municipales.

³⁰ Declaración Preliminar de la Misión de Observación Electoral Mauritania 2006, Nouakchott, 22/11/06.

³¹ Como ejemplo, el CMJD nombró como jefe del Gobierno a Sidy Mohamed Ould Boubacar, miembro del *Parti républicain démocratique et social* (PRDS), el partido en el poder hasta entonces, y a la vez ex-Primer Ministro de Ould Ould Taya (1992-1996). El resto de integrantes del Gobierno de transición pertenecen en su mayoría al PDRS pero con un perfil más tecnócrata.



administración sigue siendo la misma que la de antes del golpe de Estado. Otras críticas a este periodo de transición se refirieron a que ha faltado concertación electoral con los partidos políticos, o bien que las medidas adoptadas han tenido un contenido básicamente político y económico pero que prácticamente no se han ocupado de asuntos sociales. Por otra parte, respecto a la votación de las reformas constitucionales, la llamada de algunos sectores políticos a un menor presidencialismo fue desatendida. Referente a las elecciones de noviembre, hubo algunos elementos negativos, como la falta de programa y de ideas en la campaña electoral, la insuficiente sensibilización a la población, la existencia de irregularidades en el proceso, aunque no mayores³², el elevado voto nulo, que empañó la validez del resultado en algunos colegios electorales³³, y el hecho que ciertos colectivos negro-africanos no pudieran votar³⁴. Además, uno de los hechos más criticados y que causó un mayor revuelo en septiembre de 2006 fue la denuncia de injerencia de las autoridades militares, que habían expresado su compromiso de mantenerse neutrales, en el proceso electoral a través de las candidaturas independientes³⁵. Al mismo tiempo, la creación de numerosos partidos pequeños (los llamados 'partidos cartera') también fue interpretada como un intento de las autoridades de transición de poner trabas a las votaciones, dificultando el proceso electoral.

Sin embargo, el descontento mayoritario en este periodo de transición, manifestado con un sentimiento de desilusión, fue el de aquellos que esperaban que todo lo relacionado con el *passif humanitaire* tendría su espacio en este periodo. Para algunos, sobre todo las organizaciones de derechos humanos, la transición hubiera podido servir para que los partidos hicieran una mayor presión en algunos aspectos, como pedir un reconocimiento de los hechos o facilitar el retorno de los refugiados, y sobre todo para haber creado los instrumentos para transformar el conflicto latente que existe en Mauritania. El hecho de que organizaciones como la Asociación de Viudas no hubiera recibido apenas atención de las autoridades de transición es una prueba de su intención de no tratar una cuestión tan delicada y con tantos responsables en su entorno. Así, en la valoración de la transición se observan dos dinámicas contrapuestas en función de su procedencia. Por un lado, los partidos políticos, con una cierta 'complacencia' (algunos hablan incluso de actitud de 'seducción' de los partidos hacia las autoridades), incrementada a la vista del 'éxito' de las elecciones de noviembre. Por otra parte, la sociedad civil, que pasó del escepticismo al desencanto por la desatención de buena parte de sus propuestas, a pesar de haber sido reconocidas en el marco de las jornadas de concertación.

De entrada, hay que señalar que una primera limitación de esta transición era que 18 meses es un periodo corto. La exigencia, proveniente sobre todo de la comunidad internacional, tuvo sus razones, principalmente el intentar agilizar el máximo el proceso para evitar un posible descarrilamiento. Pero se hizo en detrimento de su profundidad. De hecho, las autoridades mauritanas manifestaron la sobrecarga del periodo, expresando que la limitación temporal y también en términos de legitimidad impedía ocuparse de 'todo', argumento progresivamente asumido por los partidos políticos. En todo caso, las posturas sobre el alcance que debería tener la transición corren el riesgo de reflejar las verdaderas intenciones en la post-transición: aquellos que insisten en que durante la transición no había ni tiempo ni legitimidad para ocuparse de aspectos como el *passif humanitaire* y la impunidad que ha conllevado, parecen querer relegar la cuestión al olvido; por otra parte, los que esperaban que estas cuestiones se trataran durante la transición son conscientes de que lo que no se haya tratado en esta etapa, difícilmente será abordable en

³² Si bien hubo coincidencia en afirmar que el fraude no había sido masivo, como en anteriores contiendas, y que algunos de los intentos se habían visto frustrados, se detectaron: compra de abstención en ciertos barrios (confiscación de la carta de identidad hasta pasadas las elecciones); creación de colegios de voto falsos para controlar, comprobando posteriormente, el voto emitido; votación en nombre de otra persona esquivando la marca de tinta; voto organizado de militares a favor de partidos del antiguo régimen, entre otras irregularidades.

³³ El porcentaje de voto nulo en la primera vuelta de las elecciones (19 de noviembre) fue, por una parte, en las legislativas, del 11,46% en la lista por circunscripciones y del 17,18% en la lista nacional; en las municipales fue del 10,10%. Sin embargo, en algunos colegios electorales llegó al 80%.

³⁴ Según asociaciones de derechos humanos, hubo un bloqueo sistemático para impedir que se alistaran buena parte de los 40.000 retornados de Senegal, utilizando como exigencia el disponer de cierta documentación imposible de conseguir.

³⁵ Si, por una parte, la salida repentina de integrantes del antiguo partido del régimen (PRDS) para presentarse como candidatos independientes fue denunciada por los partidos de la antigua oposición por suponer una intromisión de la Junta Militar en el proceso, también hay que tener en cuenta que la existencia de candidatos independientes (impecable, de hecho, desde el punto de vista formal) tuvo tres efectos positivos: por una parte, permitir la presencia de aquellos independientes 'verdaderos' (en oposición a los vinculados al PRDS –posteriormente transformado en PRDR- que fueron llamados 'falsos independientes'; en segundo lugar, evitó la creación de dos bloques polarizados en la Asamblea –el PRDR vs. partidos de la ex -oposición); y finalmente, posibilitó que candidatos islamistas, cuyo partido no había sido autorizado, se presentaran a las elecciones, posibilitando así desactivar una demanda existente.



la siguiente. En definitiva, entre aquellos que querían, o aceptaban, una transición de mínimos y otros que deseaban que fuera de máximos.

De esta forma se llega a la otra limitación de esta transición: la voluntad política. No se puede olvidar que durante los 'événements' el actual Presidente Ely Ould Mohamed Vall era director de la Seguridad Nacional y que incluso él mismo reconoció que si se hiciera justicia una parte importante de los mauritanos podían ser condenados. Cabe preguntarse entonces si la maniobra de la transición pretendía en primer lugar evacuar a Ould Taya³⁶, y en segundo lugar blindar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Algunos críticos argumentan incluso que este periodo ha sido utilizado para destruir pruebas de aquellas violaciones. En todo caso, queda abierta la cuestión: ¿hubo voluntad real de cambio o fue sólo la 'necesidad' a la víspera del estallido de la tensión y del riesgo de la rendición de cuentas?

Referente al papel de la comunidad internacional en los cambios sucedidos en Mauritania, se especuló considerablemente acerca de su influencia en el cambio democratizador, y por tanto en su potencial de maniobra en un futuro. Aparentemente, su papel fue menor del que algunos apuntaban. En todo caso, la comunidad internacional acompañó y presionó en aspectos como la presencia de la Misión de Observación Electoral de la UE o la adopción de la papeleta única. Indudablemente, los 24 puntos firmados con la UE reflejaron el compromiso entre ambos, pero también mostraron, por una parte, el interés de Mauritania en 'arrimarse a Europa', y la voluntad de utilizar los puntos como *check list* para el propio gobierno mauritano. En todo caso, la celebración, y de forma globalmente satisfactoria, de la convocatoria electoral de noviembre, aumentó el grado de convencimiento de la comunidad internacional sobre la voluntad e interés de transformación democrática por parte de las autoridades mauritanas.

5. Riesgos y retos en el futuro de Mauritania

El país se encuentra en estos momentos en un momento crucial. Crucial por los riesgos que se presentan en numerosos ámbitos, pero también por los retos que se dibujan y que se traducen en oportunidades de paz para las y los mauritanos.

El principal riesgo deriva del resultado de las próximas elecciones de marzo de 2007. Si bien la consecución positiva de las elecciones legislativas y municipales supuso un primer elemento de consolidación de la dinámica democratizadora iniciada, la próxima figura presidencial será la que determinará en gran medida el camino del país, principalmente, porque en un régimen profundamente presidencialista como el de Mauritania, el Presidente concentra grandes poderes. El escenario de riesgo se incrementa si tenemos en cuenta algunos elementos manifestados a lo largo de este periodo, cuando sectores vinculados al antiguo régimen como el del propio Ely Ould Mohamed Vall mostraron su capacidad de influencia: primero con la estrategia de la Junta Militar de promover candidaturas independientes con candidatos a quién controlar; después, con el impulso a un candidato presidencial a quién poder manejar³⁷. El triunfo de esta última opción sería uno de los peores escenarios posibles, ya que supondría la demostración de que poco o nada ha cambiado y de que la Junta Militar pretende seguir dirigiendo, de forma más o menos directa, las riendas del país. Unas elecciones anticipadas en las que Ely Ould Mohamed Vall se presentara, cumpliendo de hecho la promesa de no concurrir en las contiendas electorales del periodo de transición, no serían descartables. Si fuera así, la apertura democrática, incluida 'la primavera de la prensa', sería poco más que el cambio similar al de 1991, con un multipartidismo puramente formal y con una democracia de escaparate.

Evitar una situación de estas características depende de varios factores. Por una parte, de la presión que puedan ejercer los partidos en juego, principalmente los de la antigua oposición. Si bien muchos de ellos salieron fortalecidos con las elecciones de noviembre, la desintegración progresiva que sufrió la coalición que habían formado (con multiplicidad de candidatos presidenciales), acompañada, en contrapartida, de la cohesión expresada por los candidatos independientes más o menos próximos a la Junta Militar, les deja poco margen de influencia³⁸. De hecho, la mayoría de partidos políticos han manifestado un progresivo

³⁶ Nótese que tanto Mohamed Ely Ould Vall como Mohamed Ould Abdel Aziz pertenecen a la tribu Ouled Bou Sba, muy favorecida por el régimen de Ould Taya.

³⁷ Es el caso de Sidi Ould Cheikh Abdellahi, tildado de ser 'el candidato de los militares'.

³⁸ Ocho partidos de la antigua oposición se agruparon para formar la *Coalition des Forces du Changement Démocratique* (CFCD) y obtuvieron 41 de los 95 escaños en la Asamblea Nacional. La principal formación de la CFCD es el *Rassemblement des Forces*



‘descafeinamiento’ de sus demandas democratizadoras a medida que la transición avanzaba. Por otra parte, depende del margen de maniobra del que dispongan las organizaciones de la sociedad civil. Con un potencial enorme para encauzar muchas de las cuestiones candentes que preocupan a buena parte de la sociedad mauritana, hace faltar ver qué mecanismos de fortalecimiento serán puestos a su alcance para dotarlos de verdadera capacidad de incidencia. Las asociaciones de derechos humanos y de defensa de los intereses de la ciudadanía poseen el pulso de las demandas sociales que más preocupan a los mauritanos, por lo que un proceso no inclusivo derivaría en una desatención peligrosa de necesidades e inquietudes.

¿Cuáles son las necesidades más apremiantes que el país debe resolver en el corto y medio plazo? En primer lugar, las referidas al ámbito socioeconómico. Con unos índices de pobreza elevados (la esperanza de vida es de 51 años), con los estándares de educación y sanidad gravemente mermados, el primer reto se presenta en actuar sobre estos aspectos y, paralelamente, en redistribuir las riquezas que el país ya posee. En efecto, los índices de desigualdad son profundamente elevados, producto de décadas de dominación de élites económicas, que han accedido a los recursos precisamente gracias al acceso al poder político, y que han desatendido las necesidades de buena parte de la población. Los numerosos ingresos procedentes de las ingentes reservas pesqueras que posee Mauritania, juntamente con los procedentes de la explotación de los yacimientos de hierro, han sido gestionados en el pasado con métodos profundamente obscurantistas y elitistas. Los nuevos ingresos del petróleo podrían ofrecer las bases para una redistribución de las rentas, aunque la reciente revisión a la baja de las expectativas generadas hace poco más de un año (debido al descenso de la cantidad de reservas probadas, y a la disminución del precio del crudo) ponen en duda la relevancia de esta nueva fuente de ingresos. En todo caso, la adscripción a iniciativas de control de las rentas petrolíferas³⁹, encaminada a evitar la llamada ‘maldición de los recursos’, se presenta como un buen comienzo para aprovechar la oportunidad de una gestión transparente y con voluntad equitativa que permiten estas rentas, además de ofrecer la posibilidad de dar legitimidad al futuro gobierno.

En segundo lugar, Mauritania debe aunar esfuerzos en crear verdaderos espacios de reconciliación entre las diferentes comunidades que componen el país. Las llamadas a la reconciliación nacional suenan a menudo a discurso vacío que no ataja las verdaderas causas de fondo ante la existencia de un conflicto no resuelto. En primer término, sería necesario establecer espacios físicos de encuentro, empezando por las escuelas. En segundo término, es imperativo un reconocimiento formal del carácter plural y multicultural de la sociedad mauritana, empezando por una equiparación de las diversas lenguas que manejan sus habitantes. Muchas otras cuestiones deben ser abordadas, como la propiedad de la tierra o las discriminaciones existentes a muchos niveles (en las prácticas culturales, el acceso a la función pública y a la universidad, en la asignación de mercados públicos, etc). No se puede olvidar que la polarización de la sociedad ha ido *in crescendo*, y que muchos factores pueden facilitar la politización e instrumentalización de la etnicidad.

Dicho esto, los espacios y los discursos de encuentro y de reconciliación no serán posibles sin una resolución adecuada de todo lo relacionado con el *passif humanitaire*. Por una parte, las violaciones de derechos humanos de la época pasada requieren, como mínimo, de un reconocimiento por parte de las autoridades y de la transmisión de mensajes en este mismo sentido a todo el conjunto de la población. Para muchos, se trata más de un malentendido, un desencuentro, entre las víctimas de los hechos del 1989, 1990 y 1991 y buena parte del resto de mauritanos (los no responsables de lo ocurrido), que de un problema verdadero entre unos y otros. Por tanto, es necesario aplicar mecanismos de desactivación de la tensión que pasarían, en el peor de los casos, sólo por el reconocimiento de los hechos, y en el mejor de los casos, por mecanismos de justicia transicional que incluyan la memoria, la verdad, la justicia, la reparación, y la reconciliación (en este orden). Abordar el asunto desde un punto de vista penal podría hacerse de una forma restringida, de manera que, entre la ‘caza de brujas’ y el ‘pasar página’ se encontrara el justo medio que permitiera una paz verdadera.

Démocratiques (RFD) dirigido por Ahmed ould Daddah. Por otro lado, los independientes consiguieron 39 escaños. Sin embargo, a principios de enero 2007 varios partidos de la CFCD presentaron diferentes candidatos a las elecciones presidenciales, mientras que los independientes se agruparon en el *Rassemblement National des Indépendents* y, juntamente con otras formaciones de la ex – mayoría presidencial, mostraron su apoyo a un candidato único, Sidi Ould Cheikh Abdallahi.

³⁹ En enero de 2006 Mauritania estableció un Comité Nacional en el marco de la *Extractive Industries Transparency Initiative* y posteriormente, en agosto de 2006, se adhirió a la iniciativa *Publish What You Pay*.



Paralelamente a esta cuestión, quedan por resolver otros asuntos derivados de los 'événements', principalmente la situación de los deportados en Senegal. Esta situación debe ser asumida por las autoridades, conjuntamente con el Gobierno del país vecino y con la colaboración de los organismos competentes (ACNUR). En todo caso, no sirven los discursos del tipo 'no hay refugiados, todo el mundo es bienvenido en Mauritania', utilizados por Ely Ould Mohamed Vall, porque no suponen más que una negación del problema⁴⁰. Un retorno organizado llevaría evidentemente dificultades, pero también es verdad que cabría valorar su magnitud real, quizá menor de la esperada, a partir de consultas con todos los agentes implicados y buscando un consenso amplio que no genere reticencias⁴¹.

Los riesgos asociados al tratamiento del *passif humanitaire*, y de los derechos humanos en un sentido más amplio, han quedado patentes a lo largo de la transición. La posición progresivamente complaciente de la mayoría de los partidos en sus reivindicaciones en la materia, en paralelo al paulatino descontento de las asociaciones de derechos humanos, que pensaban que la transición era la ocasión oportuna para abordar la cuestión, ha sido el reflejo de esta divergencia de posiciones. El peligro reside en que el nuevo Presidente no se sienta ni interpelado ni responsable de todos estos aspectos derivados de acciones pasadas del antiguo régimen y deje, por tanto, que se diluya la reivindicación. Si esto ocurriera, sólo algunos partidos que han mantenido firme su discurso, a pesar de su limitada capacidad de influencia, conjuntamente con la fuerza de la sociedad civil, podrían actuar y presionar para que el respeto de los derechos humanos, en el pasado, en el presente y en el futuro, no sean cuestiones sin resolver. De ser así, no sería más que 'aparcar' el problema y trasladarlo a un futuro más o menos lejano.

Cabe aquí hacer una mención al debatido problema de la esclavitud en Mauritania. A pesar de su abolición formal en 1981, su práctica siguió y sigue a lo largo del país y, en mayor o menor medida, en el seno de todas las comunidades. La posición oficial, sin embargo, ha sido de negación de su existencia, refiriéndose en general y exclusivamente a las 'secuelas' que el esclavismo ha producido. Tal y como varias organizaciones de la sociedad civil denuncian, es necesario llevar a cabo una investigación del alcance de la esclavitud y poner medidas para su erradicación. No obstante, también hay que añadir que la responsabilidad de su existencia no es imputable directamente al Estado, por lo que el tratamiento debe ser muy diferente al que se somete todo lo relativo al *passif humanitaire* y otras violaciones de los derechos humanos con autoría del Estado (por ejemplo, la tortura).

La desactivación de los riesgos a los que Mauritania hace frente, en los ámbitos económicos-sociales y, sobre todo, los vinculados a los derechos humanos, tienen su repercusión en un tercer ámbito: la cuestión de la seguridad. Antes del golpe de Estado del 3 de agosto de 2005 el país se encontraba al borde de la guerra civil, cuando las tensiones político-sociales habían llegado a un punto álgido. Además, no fue hasta poco después de agosto que varios de los grupos armados mauritanos existentes firmaron su renuncia a la violencia, tras una lucha de cerca de dos decenios⁴². Finalmente, referente a los ataques de corte extremista islámico, aunque a vaivén del contexto internacional, su potencialidad de actuación en Mauritania no es desdeñable⁴³. El no reconocimiento de una corriente islamista moderada con una clara voluntad política, junto a la historia de criminalización de islamistas con argumentos poco fundamentados, puede contribuir a activar respuestas violentas en algunos sectores⁴⁴.

Paralelamente, en la valoración del alcance potencial del proceso de transición, no hay que olvidar que éste, como muchos otros procesos, tiene sus 'spoilers'. Es decir, aquellos detractores de los cambios que pueden torpedear los avances en favor de sus propios intereses. Por ejemplo, una parte del entorno económico. Para ellos, la transición, con el aumento de las medidas de control y de transparencia, aparece como una amenaza a sus hasta ahora monopolios amparados por prácticas patrimonialistas y por desvíos de fondos generalizados. Otro ejemplo: personas del entorno militar, para quienes su pertenencia al

⁴⁰ En una declaración de Ely Ould Mohamed Vall en Dakar, en marzo de 2006, el Presidente afirmó que 'no pienso que haya refugiados mauritanos en Senegal, los dos pueblos están tan inbrincados que esta palabra es inapropiada' (ICG, 2006).

⁴¹ Ver las propuestas realizadas en este sentido, como la de FLAM-Renovation 'Proposition de projet pour un retour organisé des déportés', 05/11/06 en CRIDEM

⁴² En la Declaración de Dakar del 14 de agosto de 2005, el FLAM y otros grupos renunciaron a la lucha armada y se comprometieron a la utilización de vías pacíficas para sus reivindicaciones.

⁴³ Ver las recientes detenciones en Noukchott y la constatación de la existencia de células terroristas en la zona, a remolque de un GSPC argelino que está incrementando su capacidad mortífera (El País, 13 y 17/01/07)

⁴⁴ Ver *Islamisme en Afrique du Nord IV: Contestation Islamiste en Mauritanie: Menace ou bouc émissaire ?*, International Crisis Group, 11/05/05. Los islamistas no fueron autorizados a presentarse en las elecciones de noviembre y tuvieron que hacerlo como independientes o bajo otras siglas.



ejército era un *leitmotiv* y el predominio de espacios civiles supone una amenaza a sus aspiraciones (como alguien dijo: ‘en un país con una historia como la de Mauritania, muchos soñaban con ser *putschistas*’⁴⁵). De hecho, la práctica totalidad del ejército, así como de los integrantes de la administración, siguen siendo los mismo que durante los 20 años de régimen represivo de Ould Taya, por lo que sus inercias y sus reticencias al cambio son, de entrada, fuertes.

Pero los tres ámbitos, socioeconómico, derechos humanos, y seguridad, están supeditados a las actuaciones políticas, por lo que sin una transición que rompa con las dinámicas pasadas y que lleve a cabo una actuación responsable difícilmente será posible una incidencia completa ni una acción global que permita vislumbrar un futuro mejor para los y las mauritanos.

Conclusión

El golpe de Estado de 2005 se convirtió para Mauritania en una bocanada de aire para un país que se encontraba al borde de la asfixia. Las asociaciones de derechos humanos, largamente prohibidas, empezaron a ver la luz; la oposición política, incluidos muchos tildados de islamistas, se sintió ‘liberada’; la prensa, por primera vez en muchos años, fue autorizada a la crítica y al uso de la libertad de expresión. El proceso fue debatido en las ‘históricas’ jornadas de concertación, donde los objetivos de la transición fueron planteados y sus plazos definidos. En este camino ha habido tiras y aflojas, con una cuerda en algún momento peligrosamente tensada pero poco a poco distendida. Las elecciones legislativas supusieron un importante paso adelante, con la observación de una misión de la Unión Europea por primera vez en la historia del país, y con una participación del 70% de la población.

Pero la visión de los árboles no debe tapar el bosque. Este periodo de menos de dos años, hasta marzo de 2007 con las elecciones presidenciales, ha puesto algunos cimientos para un cambio democratizador. Pero la idiosincrasia y las inercias no se transforman de un día para otro. Ni desde fuera. Éste es uno de los puntos fuertes de la transición, y es que ha tenido un contenido esencialmente nacional, a diferencia de los cambios sólo formales de 1991 que tuvieron un destacable componente externo. Al mismo tiempo, la falta histórica de oportunidades democráticas tras décadas de régimen autoritario, o la gestión patrimonial de los recursos, siguen pesando y limitando el alcance de los cambios. Pero sobre todo, es la desigualdad, económica, política, cultural y social, de las diferentes comunidades que conforman la población mauritana, con una diversidad no reconocida, y la presencia permanente en el pensar colectivo de actos condenables contra los derechos humanos cometidos hace una década y media, el que pone a prueba el alcance de esta transición.

Sin que Mauritania tenga en cuenta los riesgos de deriva, a la no democracia y al conflicto, ni aproveche las oportunidades que la ocasión le brinda, la transición iniciada tendrá un contenido de mínimos. Si, en cambio, aborda de frente los agravios presentes y pasados, esencialmente todo lo relacionado con el *passif humanitaire*, y facilita recursos y oportunidades al conjunto de los ciudadanos, la transición podrá ser de máximos. La responsabilidad para ello recae esencialmente en el nuevo Presidente surgido de las elecciones de marzo. Pero no exclusivamente: la clase política debe reivindicar su espacio para poder asumir sus compromisos; y, entre todos, dejar el espacio, imprescindible, para todos aquellos movimientos de la sociedad civil que, capitalizadores de los sufrimientos y agravios de buena parte de los mauritanos, llevan tiempo trabajando en lo que el país tiene pendiente. Sólo desde aquí, Mauritania podrá encarar las bases de un futuro de paz completa.

⁴⁵ Entrevista en Nouakchott, 30 de noviembre 2006.



Bibliografía

Amnistía Internacional, *Human Rights Violations in the Senegal River Valley*, octubre 1990
<http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR380101990?open&of=ENG-MRT>

Club de Madrid, 'Mauritania: Los desafíos de una apuesta democratizadora, Informe de la misión de evaluación del Club de Madrid', 20 de febrero – 1 de marzo 2006'.
http://www.clubmadrid.org/cmadrid/fileadmin/06Abr- Mauritania_Espanol.pdf

Gobierno de Transición de Mauritania, *Rapport sur l'activité du Gouvernement de Transition (3 août 2005-28 novembre 2006)*, novembre 2006

Informes de las jornadas de concertación, en <http://www.mauritania.mr/fr/concertation.php>

International Crisis Group
Islamisme en Afrique du Nord IV: Contestation Islamiste en Mauritanie: Menace ou bouc émissaire ?, 11/05/05
La transition politique en Mauritanie: Bilan et Perspectives, 24/04/06

López Bargados, A. 'Mauritania : cuatro paradojas y una coda', Institut Europeu de la Mediterrània, 26/07/06

Los 24 compromisos con la Unión Europea. *Engagements de la République Islamique de Mauritanie*, en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0166fr01.doc

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, *Déclaration préliminaire de la Mission d'Observation Electorale Mauritanie*, 22/11/06

Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou. *Variation sur l'usage du coup d'Etat en Mauritanie –version développée*, Le monde Diplomatique, novembre 2005

Taine-Cheickh C, *Les langues comme enjeux identitaires : La Mauritanie, un tournant démocratique ?*, Politique Africaine, 1994, vol.55, pp.57-65

Algunas páginas web de interés

Agence Mauritanienne d'Information (AIM)
<http://www.ami.mr/fr/defaultfr.htm>

Annuaire électronique des Organisations de la Société Civile (OSC) en Mauritanie
<http://www.osc-mauritanie.mr/>

Centre d'information et Documentation des Nations Unies en Mauritanie
<http://www.un.mr/revuepresse/revue26juin-03juil-06.htm>


Convergence Républicaine pour l'Instauration de la Démocratie en Mauritanie (CRIDEM)
<http://www.cridem.org/>

Conscience et résistance
<http://www.conscienceresistance.org/>

Delegation de la Commission Européenne en Mauritanie
http://www.delmrt.ec.europa.eu/fr/ue_mauritanie/ue_mauritanie.htm

Mission Economique de l'Ambassade de France
<http://www.missioneco.org/Mauritanie/>



Mauritania en construcció:  ¿una oportunitat de mínims o de màxims?

Mission d'Observation Electorale UE Mauritanie
<http://www.euomauritania.org/mauritania/default.asp>

Noukachtot Info
<http://www.akhbarnouakchott.com/index.php>

Portal oficial de Mauritania
<http://www.mauritania.mr/fr/index.php>

Organisation contre les Violations des Droits de l'Homme en Mauritanie (OCVIDH)
<http://www.ocvidh.org/>

SOS Esclave Mauritanie
<http://www.sosesclaves.org/>

ESCOLA DE CULTURA DE PAU

Edifici G6 · Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra-Barcelona, Espanya

Tel.: + 34 93 581 27 52 • Fax: +34 93 581 32 94

Web: www.escolapau.org • E-mail: alerta.escolapau@pangea.org

LA ESCOLA DE CULTURA DE PAU FUE CREADA EN 1999, CON EL PROPÓSITO DE ORGANIZAR VARIAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA CULTURA DE LA PAZ, LA PREVENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS, EL DESARME Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LA ESCOLA ESTÁ FINANCIADA BÁSICAMENTE POR EL GOBIERNO DE CATALUNYA, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO PARA UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, Y DE LA AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LA SECRETARIA DE COOPERACIÓ EXTERIOR. TAMBIÉN RECIBE APOYOS DE OTROS DEPARTAMENTOS DE LA GENERALITAT, DE AYUNTAMIENTOS, FUNDACIONES Y OTRAS ENTIDADES.

